

Bogotá D.C.,

Señores

PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

NIT 900.961.137-8

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO

Representante Legal

E-mail: PROCIVINSAS@OUTLOOK.COM – licitacionescas@outlook.com –
licitaciones@procivin.com

Carrera 43 No. 24A -61

Ciudad

ASUNTO: Ultima reiteración a derecho de petición con radicado 2025EE0067204 del 16 de octubre de 2025.

Respetados señores.

AURA JANNETH SANTANA ADAMES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.049.914, actuando en calidad de Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mediante resolución 0431 de 2023, posesionada mediante Acta 097 del mismo año, además en calidad de supervisora del Contrato No. 1002 de 2024 celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO** en calidad de **CONTRATANTE** y **PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.- PROCIVIN-**, a través de este instrumento y conforme al asunto de la referencia, reitero la petición de la referencia atendiendo no solo a lo reglado en este acto contractual, aunado de acuerdo con lo reglado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, previo a las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

- 1.1.** El pasado 16 de octubre de los corrientes, a través de oficio con radicado 2025EE0067204 se elevó un derecho de petición a usted, conforme a la parte motiva de ese escrito.
- 1.2.** Con todo, hoy día no se ha recibido respuesta alguna de su parte teniendo de presente los quince (15) días de los que trata el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Término perentorio que se venció el pasado siete de noviembre de 2025, contado desde la fecha de radicación de la mencionada solicitud, a saber, el 16 de octubre del mismo año.
- 1.3.** Al respecto, téngase de presente que se está en presencia de un Derecho de Petición y cuya resolución no es escueta. La Carta Magna en el artículo

23 establece: *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."* En suma, el Estado Colombiano en aras de dar plenas efectividad a dicho precepto constitucional, promovió su protección y trámite a través de la ley estatutaria 1755 de 2015, que modificó el título segundo de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-.

La jurisprudencia constitucional, suficientemente, se ha pronunciado respecto del derecho fundamental a la petición. Este *ius*, reviste amplia importancia en el devenir jurídico y, sobre todo, en la relación de los ciudadanos respecto de las diversas entidades, bien públicas o privadas. Ejemplificando, en la sentencia T-219 de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se dijo: *"(...) ha dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de elevar solicitudes a las autoridades para pasar a garantizar, en consonancia con el principio de la democracia participativa (C.P. Art.1º), la pronta resolución de las peticiones. La tutela administrativa de los derechos fundamentales es un derecho contenido en el núcleo esencial del derecho de petición que no sólo exige una respuesta cualquiera de la autoridad, sino la pronta resolución de la petición, bien sea en sentido positivo o negativo."*

En esa misma línea, vale decir, analizando el derecho de petición y su resolución, es menester de igual manera, exhibir lo enunciado en la sentencia T-369 de dos mil trece (2013): ***"Protección constitucional y alcance del derecho fundamental de petición. Reiteración de Jurisprudencia."*** El artículo 23 de la Constitución Política establece que *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."* Con fundamento en la citada norma, en varias oportunidades esta corporación ha definido el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. Así las cosas (SIC) este incorpora en su núcleo esencial los siguientes elementos: (1) *El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.* (2) *El derecho de obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.* (3) *El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo a su competencia, se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado; esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.* (4) *El derecho a obtener una pronta*

comunicación de lo decidido. Esta corporación de manera abundante y reiteradas oportunidades se ha referido al alcance y ejercicio del derecho de petición, trazando algunas reglas básicas sobre la procedencia y efectividad de esa garantía fundamental. Así, ha establecido los presupuestos mínimos que determinan el ámbito de su protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en los siguientes términos. (...) (iv) la respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de fondo, de manera clara, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. (...).". (Subrayado fuera del texto).

Dado el escenario que concierne a este petitorio con la presentación de este escrito, este ministerio da por agotado, por última vez, el requisito de subsidiariedad en los términos trazados por el cuerpo colegiado constitucional en sendos pronunciamientos jurisprudenciales, por ejemplo en Sentencia T- 337 de 2019, con ponencia del magistrado Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, expediente T- 7.146.128: "*La Corte constitucional ha establecido que la acción de tutela es un medio judicial con carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto ha señalado que no es suficiente la mera existencia formar de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela.* (...)".

1.4. En mérito de lo expuesto,

II. SOLICITUD

2.1. Comedidamente se reitera la petición con radicado 2025EE0067204 del 16 de octubre de 2025, cuya respuesta amerita ser presentada a este ministerio de carácter inmediato dado el fenecimiento del término para su resolución.

2.2. Para tal efecto, cuenta usted con tres (03) días hábiles para lo propio, esto es, hasta el día 14 de noviembre de 2025.

III. NOTIFICACIONES

Recibimos notificaciones a través del correo electrónico: gruporecursosfisicos@minvivienda.gov.co; de conformidad con lo reglado en los

artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-; sin perjuicio de las demás normas concordantes sobre la materia.

Lo anterior, con el fin de asegurar la calidad, funcionalidad y estabilidad de las intervenciones realizadas, así como el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales a satisfacción de la Entidad.

Quedo atenta a la pronta respuesta.

Atentamente,

JANNETH SANTANA ADAMES
Coordinadora Grupo de Recursos Físicos.

Elaboró:

Julián G. Morales Calderón.

Abogado Contratista

SSA

